

012.77
P19
III

40433

**PROYECTO DE
LEY AMBIENTAL**

**PROVINCIA DE
LA PAMPA**

Informe Final

**CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES**

Dra. Beatriz Pietra

"Cada nación tiene derecho al uso soberano de sus recursos naturales. Pero, al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y utilización racional de los mismos. El derecho a la subsistencia individual impone el deber hacia la supervivencia colectiva, ya se trate de ciudadanos o pueblos"

Juan Domingo Perón,, Madrid. Febrero 1972

FUNDAMENTO

La legislación ambiental nacional y provincial está en pleno proceso de consolidación acompañado de un imprescindible fortalecimiento institucional.

Este proceso es concordante con el que se viene operando en todos los países más o menos industrializados, donde se ha generalizado un clima de opinión en torno a los problemas del medio.

Es a partir de los años '50 cuando empiezan a manifestarse las primeras intervenciones del Estado respecto de las cuestiones ambientales.

Puede decirse que el derecho ambiental moderno, en cuanto a intento por lograr un tratamiento a gran escala de la contaminación, arranca en 1.970 cuando se pone en vigencia la National Environmental Policy Act de E.E.U.U.

A nivel internacional se van produciendo una serie de eventos como:

- Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de Recursos, Nueva York, 1949.
- Acuerdo Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar por Petróleo, 1954.
- Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre Bases Científicas para el Uso Racional de la Biósfera. UNESCO, 1968.

Para culminar con la Conferencia de Estocolmo de 1972

En esta reunión se puso de manifiesto la preocupación, que aún hoy genera temores en los países menos desarrollados: que la atención y la afectación de recursos hacia objetivos ambientales, provoque el descuido de temas para ellos más acuciantes como la pobreza y el hambre.

"Un escollo capital para la puesta en práctica de las, por lo demás razonables, propuestas de limitación del crecimiento, radica en la actual distribución a escala mundial de los niveles de riqueza. Efectivamente, las naciones en las que más fervorosamente se sugiere este tipo de soluciones son aquellas que disfrutan ya de situaciones económicas prósperas y confortables, y dentro de ellas la problemática ambiental tiene un eco privilegiado en los grupos sociales que ostentan las mayores rentas" (1).

Resulta absolutamente inequitativo sostener, aún, razonables propuestas de limitación de crecimiento, dentro de un Estado donde grandes grupos de su población tienen sus necesidades básicas insatisfechas.

Cuando lo que está en juego no es la mejora de la vida sino la supervivencia, es lógico el rechazo de detener el crecimiento.

Creemos que la equidad no está reñida con la

ecología.

Por el contrario, los grandes problemas ecológicos que hoy amenazan a la humanidad tienen su origen en situaciones de pobreza extrema y en una desigual distribución de la riqueza.

Ya la Conferencia de Estocolmo, en su Principio 11, establece que "...las políticas ambientales de todos los Estados deberían estar encaminadas a aumentar el potencial de crecimiento actual o futuro de los países en desarrollo y no deberían coartar ese potencial ni obstaculizar el logro de mejores condiciones de vida para todos..."

Es dentro de este contexto ideológico que creemos debe encararse una normativa ambiental, que permita la consideración del entorno en un proceso de desarrollo tendiente a lograr mejores condiciones de vida para todos, con justicia y equidad.

El Anteproyecto de Ley Ambiental que se acompaña se enmarca dentro del artículo 18 de la Constitución Provincial, que garantiza a todos los habitantes de la Provincia el "... derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado...", imponiéndoles el deber de preservarlo.

Frente a estos nuevos derechos reconocidos constitucionalmente, el Estado Provincial tiene la obligación de protegerlos, sancionando las normas que aseguren el ejercicio pleno de los mismos.

La reforma constitucional provincial producida en 1.994 no hace más que recoger la experiencia legislativa ambiental de la Provincia, entre otros temas, en materia de aguas, fauna, bosques, áreas protegidas y residuos.

La Pampa es una de las provincias signatarias del Pacto Federal Ambiental, por el cual se acuerda: "...Promover a nivel provincial la unificación y/o

coordinación de todos los organismos que se relacionen con la temática ambiental, concentrando en el máximo nivel posible la fijación de las políticas de Recursos Naturales y Medio Ambiente...", comprometiéndose los estados firmantes a "...compatibilizar e instrumentar en sus jurisdicciones la legislación Ambiental...".

El anteproyecto cuenta con cuatro Títulos, dentro de los cuales se han introducido dos Cuestiones que merecen un comentario particular.

Una es la temática institucional: la norma proyectada propone un modelo donde se combina una única autoridad específicamente ambiental, dependiente del máximo nivel de gobierno y una comisión intersectorial, para la coordinación con otras áreas con incumbencia ambiental..

A partir de la experiencia que viene desarrollándose en la Provincia, se define como autoridad de aplicación, a la Subsecretaría de Ecología, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación con competencia específicamente ambiental.

El Proyecto da fuerza legal al Ente de Política Ecológica, como comisión intersectorial que reúne a los organismos provinciales responsables de los distintos componentes ambientales, permitiendo la coordinación y compatibilización de las actividades de los mismos. Es de destacar la inclusión en el trabajo de un instrumento de política ambiental: la declaración de impacto ambiental, previa a la realización de cualquier emprendimiento público o privado cuya nómina se detalla en el Anexo I del Proyecto.

Tal Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A). es un procedimiento previo a la toma de decisiones, dirigido a valorar de manera sistemática y global todos los efectos potenciales de un proyecto a fin de evitar consecuencias negativas para el ambiente.

Tiene características eminentemente preventivas pues se trata de determinar los elementos de riesgo para eliminarlos, antes de que ocurra el daño.

Los elementos de ponderación a considerar en la evaluación del impacto ambiental resultan de lo que cada ley determine "...en definitiva, una Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) tiene el alcance y contenido que desee el legislador..." (2)

Con respecto al Anexo I del Proyecto la nómina de obras sujetas a la D.I.A., es meramente enunciativa y su contenido podía ser modificado por el Poder Ejecutivo, a partir de una evaluación técnica política de la autoridad de aplicación.

Por ello, se faculta al Poder Ejecutivo para modificar el contenido de dicho Anexo.

Finalmente es de señalar que dentro de las disposiciones transitorias, se encomienda la armonización de toda la legislación de naturaleza ambiental en lo que se refiere al régimen de infracciones y sanciones.

Tal propuesta surge del relevamiento y análisis normativo efectuado, el que ha posibilitado detectar la vigencia de normas sectoriales ambientales, cada una con su propio régimen de infracciones y sanciones.

Por ello, para evitar superposiciones normativas y asegurar un criterio sancionatorio uniforme, se estima oportuno encarar tal armonización legislativa.

El tratamiento de la cuestión se verá facilitada dentro del ámbito de un ente interjurisdiccional, como es el Ente de Política Ecológica.

(1) MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental. GREFOL -Madrid, 1991, T.I. Pág. 63.

(2) MATEO, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental. GREFOL -Madrid, 1991, T.I. Pág. 302.

PROYECTO DE LEY AMBIENTAL

TITULO I

Capítulo Único Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1: La presente Ley, dentro del marco del artículo 18 de la Constitución de la Provincia de La Pampa, tiene como objeto la protección de los recursos naturales y del ambiente dentro del ámbito provincial, a través de: la definición de políticas y acciones, la compatibilización de la aplicación de las normas sectoriales de naturaleza ambiental y la coordinación de las áreas de gobierno intervinientes en la gestión ambiental, promoviendo la participación ciudadana.

TITULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I De la política ambiental

Artículo 2: El Poder Ejecutivo Provincial y los Municipios garantizarán, en la ejecución de sus políticas de gobierno, la aplicación de los siguientes principios de política ambiental:

a) El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, dentro de un proceso de desarrollo sustentable, debe efectuarse conforme los criterios de:

- unidad de gestión
- tratamiento integral
- economía del recurso
- descentralización operativa
- coordinación entre los organismos de aplicación involucrados en el manejo de los mismos
- participación de los usuarios

b) Todo emprendimiento, público o privado, cuyas acciones u obras sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.

c) El Poder Ejecutivo Provincial a través de sus organismos competentes, y los municipios, deben fiscalizar todas las acciones que puedan producir un menoscabo al ambiente y procederán a ejecutar, según el caso:

- acción preventiva
- acción de reparación de los daños causados mediante la reposición de las cosas a su estado anterior, siempre que sea posible reparar en especie el daño
- acción de reparación pecuniaria.

d) La planificación del desarrollo agropecuario, urbano e industrial, deberá tener en cuenta, entre otras cuestiones, los límites físicos del área, la situación socioeconómica de la región y el impacto ambiental de las acciones a emprender.

e) La educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el medio ambiente.

f) Se instrumentará, a través de la autoridad de aplicación, el sistema provincial de información ambiental, coordinando su implementación con los municipios y los demás organismos de la administración provincial.



Capítulo II

De los instrumentos de la política ambiental.

De la declaración de impacto ambiental

Artículo 3: Todos los proyectos de obras y las actividades, públicas o privadas, capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, que se enuncian en el Anexo I, deberán obtener la declaración de impacto ambiental (DIA), expedida por la Subsecretaría de Ecología, previa resolución del Ente de Política Ecológica de la Provincia.

Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a introducir modificaciones al Anexo I, a propuesta de la autoridad de aplicación

Artículo 4: La DIA será exigida por los organismos centralizados o descentralizados de la administración pública provincial y/o municipal con competencia en la obra y/o actividad.

Queda prohibido en el territorio de la Provincia, la autorización administrativa y la ejecución de actividades que no cumplan dicho recaudo, bajo la pena de aplicación de las sanciones previstas por la presente ley y sin perjuicio de la nulidad de las actuaciones administrativas que se hubiesen iniciado, haciendo responsable al funcionario autorizante bajo tales circunstancias.

Artículo 5: El responsable de la obra y/o actividad a emprender deberá presentar, integrando su propuesta, un Informe de Evaluación de Impacto Ambiental ante el organismo provincial o municipal encargado de autorizar el emprendimiento. Dicho organismo provincial o municipal, con el informe técnico correspondiente, deberá remitir todos los antecedentes obrantes en su poder a la Subsecretaría de Ecología a fin de tramitar la declaración de impacto ambiental.

Artículo 6: La Subsecretaría de Ecología convocará al Ente de Política Ecológica, sometiendo a consideración y aprobación del mismo el proyecto presentado.

Artículo 7: A los efectos previstos en el artículo anterior emitirán su opinión

técnica todas las áreas representadas en el Ente de Política Ecológica, y aquellas que sean convocadas especialmente atento a las cuestiones involucradas. El Ente podrá recabar la opinión técnica de personas idóneas en el tema de que se trate, de Universidades, Centros de Estudios e Investigación, Cámaras Empresariales, Colegios Profesionales, y demás entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, respecto de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental que se presenten.

Artículo 8: El Ente de Política Ecológica, a través de la Subsecretaría de Ecología, convocará a una audiencia pública, con la participación de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas estatales o no, potencialmente afectadas por la realización del proyecto y/o actividad y a las organizaciones no gubernamentales interesadas en la preservación de los valores ambientales que esta ley protege.

Se pondrá a disposición de los interesados todos los antecedentes del caso (el resultado de la audiencia pública, el estudio de evaluación de impacto presentado, los dictámenes técnicos emitidos y toda la documentación que pueda resultar de interés).

Artículo 9: La DIA sin audiencia pública y dictámenes técnicos será nula.

Artículo 10: Cumplidos los pasos previstos en los artículos anteriores el Ente de Política Ecológica analizará toda la documentación obrante en su poder emitiendo un dictamen técnico del que resultará la autorización o el rechazo de los EIA que se presenten.

Artículo 11: La Subsecretaría de Ecología, conforme lo resuelto por el Ente de Política Ecológica, emitirá la declaración de impacto ambiental disponiendo según el caso:

- autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones establecidos en el Estudio de Evaluación de Impacto presentado
- autorizar la realización de la obra o actividad proyectada pero condicionada al cumplimiento de las instrucciones que disponga el Ente
- negar la autorización

Se remitirá la DIA con la documentación recibida al organismo de origen, para

notificar al interesado.

Artículo 12: La reglamentación establecerá los plazos y modalidades del procedimiento para obtener la DIA en general y en especial, el desarrollo de las audiencias públicas.

Del Planeamiento y ordenamiento ambiental

Artículo 13: En la localización de actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:

- a) La naturaleza y características de cada bioma
- b) La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos, la distribución de la población y sus características geoeconómicas en general.
- c) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.

Artículo 14: Lo prescrito en el artículo anterior será aplicable:

- a) En lo que hace al desarrollo de actividades productivas de bienes y/o servicios y aprovechamiento de recursos naturales:
 - 1) Para la realización de obras públicas.
 - 2) Para las autorizaciones de construcción y operación de plantas o establecimientos industriales, comerciales o de servicios.
 - 3) Para las autorizaciones relativas al uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales o primarias en general.
 - 4) Para el financiamiento de actividades mencionadas en el inciso anterior

a los efectos de inducir su adecuada localización.

5) Para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones o permisos para el uso y aprovechamiento de aguas.

6) Para el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones para el aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres.

b) En lo referente a la localización y regulación de los asentamientos humanos:

1) Para la fundación de nuevos centros de población y la determinación de los usos y destinos del suelo urbano y rural.

2) Para los programas del gobierno y su financiamiento destinados a infraestructura, equipamiento urbano y vivienda.

3) Para la determinación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, uso y aprovechamiento de vivienda.

De la protección de áreas naturales

Artículo 15: La Subsecretaría de Ecología propondrá al Poder Ejecutivo las medidas de protección de las áreas naturales para asegurar su protección, conservación y restauración dentro de los términos de la Ley 1.321, o del régimen legal que la sustituya.

De las normas técnicas ambientales

Artículo 16: Las normas técnicas ambientales determinarán los parámetros y niveles guías de calidad ambiental de los cuerpos receptores que permitan garantizar las condiciones necesarias para asegurar la calidad de vida de la población, la perdurabilidad de los recursos naturales y la protección de todas las manifestaciones de vida.

Artículo 17: Dichas normas se establecerán a través de los organismos con competencia respecto de los cuerpos receptores. Previamente deberán ser analizados y consensuados por el Ente de Política Ecológica.

Del sistema Provincial de Información Ambiental

Artículo 18: Las entidades oficiales tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que así lo soliciten, la información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales, y de las declaraciones de impacto ambiental. Dicha información sólo podrá ser denegada cuando la entidad le confiera el carácter de confidencial.

Artículo 19: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Ecología, instrumentará el Sistema Provincial de Información Ambiental, coordinando su implementación con las demás áreas del gobierno y los municipios. Dicho Sistema deberá reunir toda la información existente en materia ambiental proveniente del sector público y privado, y constituirá una base de datos interdisciplinaria accesible a la consulta de todo aquel que así lo solicite.

Artículo 20: El Sistema Provincial de Información Ambiental se organizará y mantendrá actualizado con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos vinculados a los recursos naturales y al ambiente en general.

De la Educación y Medios de Comunicación

Artículo 21: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, promoverá:

- a) La incorporación de contenidos ecológicos en los distintos ciclos educativos, especialmente en los niveles básicos.
- b) El fomento de la investigación en las instituciones de educación superior

desarrollando planes y programas para la formación de especialistas que investiguen las causas y efectos de fenómenos ambientales.

c) La promoción de jornadas ambientales con participación de la comunidad, campañas de educación popular, en medios urbanos y rurales, respetando las características de cada región.

d) La motivación de los miembros de la sociedad para que formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven.

e) La capacitación para el desarrollo de tecnologías adecuadas que compatibilicen el crecimiento económico con la preservación de los recursos naturales, la conservación y mejoramiento de la calidad de vida.

Artículo 22: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la autoridad de aplicación, coordinará con los municipios programas de educación, difusión, y formación de personal en el conocimiento de la temática ambiental. Para ello, podrá celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones públicas y privadas, investigadores y especialistas en la materia.

Artículo 23: El Poder Ejecutivo Provincial difundirá programas de educación y divulgación apropiados para la protección y manejo de los recursos naturales por medio de acuerdos con los medios masivos de comunicación.

La autoridad de aplicación coordinará su acción con otras áreas de gobierno con competencia en el tema.

De los incentivos a la Investigación, producción e Instalación de Tecnologías Relacionadas con la Protección del Ambiente

Artículo 24: El Poder Ejecutivo Provincial priorizará en sus políticas de crédito, de desarrollo industrial, agropecuario y fiscal, aquellas actividades de investigación, producción e instalación de tecnologías vinculadas con el objeto de la presente ley.

Artículo 25: La autoridad de aplicación podrá promover la celebración de convenios con universidades, institutos y/o centros de investigación con el fin de implementar, entre otras las normas que rigen el impacto ambiental.

Capítulo III

De la contaminación ambiental

Artículo 26: Queda prohibido el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de aguas, a la atmósfera y al suelo, cuando los efluentes superen los valores máximos de emisión establecido para los mismos y/o cuando alteren las normas de calidad determinadas para cada componente ambiental.

Artículo 27: La Subsecretaría de Ecología será autoridad de aplicación de la ley 1.508, a cuyos efectos propondrá al Poder Ejecutivo la reglamentación de la misma.

Artículo 28: La Subsecretaría de Ecología en coordinación con los organismos provinciales competentes conforme el cuerpo receptor, deberá determinar los valores máximos de emisión, conforme el efluente y el cuerpo receptor, dentro del marco de la Ley 1.508 y la presente y sus reglamentaciones.

Artículo 29: La autoridad de aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, llevará y mantendrá actualizado un registro de actividades riesgosas y contaminantes.

Artículo 30: La autoridad de aplicación, en coordinación con los demás organismos competentes de la Provincia, promoverá el desarrollo de métodos, tecnologías y sistemas de reciclaje o recirculación de residuos u otros tipos de transformación de bajo o nulo impacto ambiental.

Artículo 31: Toda evaluación de la degradación y medición o cuantificación de contaminantes será costeadada por las personas y/o instituciones responsables de la degradación o contaminación.

Artículo 32: La autoridad de aplicación queda facultada para ingresar en todo establecimiento, obra o inmueble cuyas actividades degraden el ambiente o lo contaminen, a cuyos efectos solicitará la orden de autoridad competente.

TITULO III

DISPOSICIONES ORGANICAS

Capítulo Unico De los Organismos de aplicación.

Artículo 33: Será organismo de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Ecología de la Secretaría General de la Gobernación, sin perjuicio de la incumbencia ambiental de cada una de las reparticiones provinciales.

Artículo 34: Constitúyese el Ente de Política Ecológica, como comisión intersectorial de la Administración Pública Provincial, con las siguientes funciones:

- a) Elaborar y proponer al Poder Ejecutivo las políticas provinciales en materia ambiental, propendiendo a la utilización racional de los recursos naturales y a la preservación del equilibrio ecológico.
- b) Fiscalizar y asesorar sobre la ejecución de dichas políticas ecológicas en el ámbito de cada ministerio.

- c) Estudiar, elaborar y proponer las normas legales tendientes a la preservación de la calidad ambiental.
- d) Emitir dictámenes sobre los aspectos técnicos, económicos, sociales y legales de las cuestiones sometidas a su tratamiento.
- e) Intervenir a través de la Subsecretaría de Ecología en actuaciones administrativas o judiciales, a solicitud de organismos o jueces competentes, en las que se tramiten o controviertan cuestiones atinentes a la calidad ambiental.

Artículo 35: El Ente estará integrado por un representante designado por cada Ministerio, con un nivel no inferior a Director.

La integrarán:

- a) Dirección de Bromatología y Saneamiento Ambiental.
- b) Dirección de Aguas.
- c) Dirección de Recursos Naturales.
- d) Dirección de Minería.

La Subsecretaría de Ecología actuará como Secretaría Ejecutiva del Ente, el que será presidido y representado por el Subsecretario de Ecología.

Artículo 36: Cuando el caso lo requiera, podrán participar otras áreas de gobierno, a requerimiento del Ente o a solicitud de las mismas.

Artículo 37: Cada organismo participante en el Ente podrá designar para colaborar con el representante titular, a los miembros adjuntos cuyo trabajo conocimientos y especialidad considere de interés.

Artículo 38: El Ente de Política Ecológica dictará su propio reglamento interno, manteniendo sus relaciones con las áreas del gobierno provincial y/o municipal y con otras entidades públicas o privadas a través de la Subsecretaría de Ecología.

reglamentarias, procederá a incoar un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad por el incumplimiento y las consecuencias del mismo. Serán de aplicación las normas de procedimiento administrativo de la Provincia.

Artículo 44: Las violaciones a la presente ley serán sancionadas con las siguientes penas:

- a) Apercibimiento.
- b) Multa equivalente a un número de días multa.

La reglamentación determinará el valor del día multa y la escala de la sanción.

Artículo 45: A los efectos de establecer la sanción correspondiente la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta la gravedad de la transgresión, el daño presente y futuro realizado al medio ambiente, los antecedentes y la situación actual del infractor.

Capítulo II

De la defensa jurisdiccional

Artículo 46: Para la defensa del medio ambiente y del equilibrio ecológico se podrá recurrir directamente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y de Minería del lugar en que el acto u omisión se exteriorice, o tuviera o pudiera tener efecto, o el Juez del domicilio del demandado a elección del actor, conforme los términos de la Ley 1.352.

Capítulo III

Disposiciones finales.

Artículo 47: El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un

Artículo 39: Todo municipio podrá verificar el cumplimiento de las normas ambientales inspeccionando y realizando constataciones. De comprobarse algún incumplimiento reclamará la intervención de la autoridad de aplicación. Asimismo podrá tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a la Subsecretaría de Ecología.

Artículo 40: El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, propiciará la celebración de acuerdos con los Municipios a los fines de un tratamiento integral de la problemática ambiental.

Se podrá constituir regiones o zonas integradas por dos o más municipios para el tratamiento de cuestiones ambientales comunes, a través de acuerdos interjurisdiccionales.

Artículo 41: El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación prestará asistencia técnica a los municipios, para la fiscalización y el cumplimiento de la presente ley.

TITULO IV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Capítulo I

De la Defensa administrativa

Artículo 42: La autoridad de aplicación fiscalizará el cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 43: Verificado el incumplimiento de la presente Ley y sus normas

plazo de 180 días.

Artículo 48: El Poder Ejecutivo Provincial a través de la autoridad de aplicación y con la intervención del Ente de Política Ecológica, procederá al ordenamiento y armonización de los regímenes sancionatorios administrativos, vigentes en materia ambiental de la Provincia.